

LA INDOLENCIA DE LA POLÍTICA CON LA SOCIEDAD

Editorial



En el mes de diciembre se conocieron los resultados de la tradicional Encuesta CEP. Esta confirmó que el umbral de legitimidad de la política institucional se encuentra en sus mínimos históricos. Al punto que la incombustible figura de Bachelet también comienza a agotarse. Tras difundirse los resultados del oráculo de la transición, en la Concertación se escucharon duras recriminaciones, llamados al orden interno y se especuló con un cambio de gabinete.

Lo que sorprende, sin embargo, no es la pésima evaluación ciudadana de las instituciones políticas, los partidos, los ministros y de la propia presidenta. Es más bien, la brutal desafección de la política con el malestar de la sociedad. Es que no les importó que las fuerzas estudiantiles, los padres y apoderados, los rectores e intelectuales exigieran una y otra vez avanzar en la construcción de una reforma educacional democrática. Tampoco fueron suficientes los airados reclamos de los funcionarios públicos ante el irrisorio reajuste del 0,5% que ofreció Hacienda. Ni siquiera les ha conmovido que cientos de colegios en el país estén paralizados o que decenas de miles de profesores salgan a las calles para exigir condiciones humanas de trabajo. No obstante estos legítimos reclamos, bastó una sola encuesta para generar la inmediata reacción de la política institucional.

La derecha se divide entre ofensivas abiertas contra Bachelet y alianzas “amplias” con el centro político para enmendar el rumbo. Los presidentes de partidos de la Concertación reclaman mayor coordinación con el Ejecutivo y acabar con las recriminaciones cruzadas. El bacheletismo redobla sus esfuerzos para explicar “en terreno” los alcances de las incomprendidas reformas. Los comunistas defienden a ultranza las reformas y esperan que la presidenta no claudique contra las fuerzas conservadoras. Entretanto, el progresismo

“La indolencia de la política con el malestar de la sociedad se profundiza. No se apela a la necesidad de incorporar fuerzas sociales excluidas por la transición ni tampoco a forjar pactos democráticos que permitan avanzar en reformas sustantivas.”

ha ofrecido todo su “capital político” para rescatar del naufragio al gobierno de Bachelet.

La indolencia de la política con el malestar de la sociedad se profundiza. No se apela a la necesidad de incorporar fuerzas sociales excluidas por la transición ni tampoco a forjar pactos democráticos que permitan avanzar en reformas sustantivas. Es que aquello son palabras mayores para la política institucional. Supone hablar de derechos sociales en serio, discutir los fundamentos del orden laboral o explicar porqué se mantiene un sistema de pensiones que no permite cubrir dignamente la vida en la vejez. Es decir, implica discutir cambios que cuestionen y transformen los basamentos del Estado Subsidiario. Lo que en la práctica, implica confrontarse con el empresariado y otros poderes fácticos que colonizan la política.

Ante la sordera de la política con el alegato de la sociedad, las fuerzas de cambio deben anteponer como derrotero “acabar con el Estado subsidiario”. Cuestión que pasa necesariamente por incorporar en la política, nuevos y heterogéneos intereses sociales excluidos por el pacto de la transición. En definitiva, se trata del imperativo de democratizar la política, o bien del cambio de su carácter social, como condición elemental para recuperar de las garras del neoliberalismo la soberanía sobre el destino de nuestras vidas ▼

Fundación Nodo XXI
Santiago, diciembre del 2014.